

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve (2019).

Referencia: 110013335 009 **2017 00099 00**
Demandante: Crispiano Jaime
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (**UGPP**)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
(Deniega llamamiento en garantía)

1. ANTECEDENTES

1.1. En memorial del 24 de abril de 2018, la demandada Fiscalía General de la Nación, llamó en garantía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que manifestó la necesidad de su intervención al proceso en razón a que existió una relación laboral entre el actor (trabajador) y el Ministerio (empleador) del 01 de noviembre de 1990 al 30 de octubre de 1991, por lo que cumplió con los requisitos para que le fuere reconocida la pensión de vejez.

Señaló que el reconocimiento de la pensión al demandante, se realizó con base en los descuentos realizados por el empleador, encontrándose que los factores solicitados no fueron objeto de descuentos tal y como consta en los certificados aportados y que reposan en el expediente administrativo (fls.1 a 2 c.2):

1.2. La providencia que admitió la demanda, se notificó por correo electrónico a la UGPP¹, el 26 de febrero de 2018 (fl.49 c.1); por lo que los veinticinco (25) días previstos en el artículo 612 del Código General del Proceso², que modificó el artículo 199 del CPACA, iban hasta el 10 de abril

¹ **Artículo 197 del CPACA.** “Dirección electrónica para efectos de notificaciones. Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Para los efectos de este Código se entenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico”.

² “Notificación personal del auto admisorio y el mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil.

(...)

de 2018; así, el término de traslado de la demanda (artículo 172 del CPACA)³ inició el 11 de abril y feneció el 24 de mayo de 2018.

En ese orden de ideas, como el llamamiento en garantía se presentó el 24 de abril de 2018, se concluye que fue oportuno, por lo que se deberán analizar los demás requisitos para su vinculación.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Asunto a resolver

Corresponde determinar si en este caso es procedente la solicitud de llamamiento en garantía formulada por la UGPP para tal efecto se deberán resolver lo siguiente: (i) cuáles son las características del llamamiento en garantía; (ii) es procedente la solicitud de llamamiento en garantía respecto de los empleadores que no efectúen los aportes en debida forma a las entidades administradoras de pensiones en juicio donde se discuta los factores salariales a incluir en la liquidación pensional; (iii) caso concreto; (iv) y decisión.

2.2. Solución al caso

2.1. Del llamamiento en garantía

El llamamiento en garantía (artículo 225 del CPACA)⁴ busca la vinculación al proceso de quienes por disposición legal o contractual, puedan llegar a tener la obligación de reembolsar total o parcialmente el pago efectuado por una de las partes como resultado de una posible sentencia condenatoria, de modo que esa responsabilidad se sujete al análisis dentro del mismo escenario procesal.

En este evento, las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento el término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.

³**“Traslado de la demanda.** De la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 de este Código y **dentro del cual deberán** contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, **llamar en garantía**, y en su caso, presentar demanda de reconvención”

(se resalta).

⁴ “(...) Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, **podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (...)**”

En lo que respecta a la remisión expresa del artículo 227 del CPACA, se debe dar aplicación al Código General del Proceso en lo no regulado por este Código, sobre la materia de intervención de terceros (artículo 64 y siguientes del CGP⁵).

Al respecto cabe agregar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente y reiterada⁶ respecto de la necesidad de acreditar la existencia de un vínculo contractual o legal entre el llamante y el llamado en garantía como fundamento de ésta figura procesal, de tal forma que **si no existe o no se prueba ésta relación**, no puede haber lugar al llamamiento en garantía.

2.2. Las obligaciones del empleador y de las entidades administradoras en el pago de los aportes

En materia de obligaciones, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993⁷, al empleador le asiste la obligación del pago oportuno a las entidades administradoras de los aportes pensionales, tanto de los que están a su cargo como en cabeza del trabajador.

El incumplimiento de dicha obligación le genera intereses moratorios, los cuales se abonarán en el fondo correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional, lo anterior de conformidad con el artículo 23 *ejusdem*.

Ahora, el artículo 24 *ejusdem* señala:

⁵ Artículo 64 Código General del Proceso. "(...) Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (...)".

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 22 de junio de 2016, expediente 25000-23-36-000-2015-01859-01 (57.098) CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 10 de junio de 2009, expediente 73001-23-31-000-1998-01406-01 (18.108) CP: Ruth Stella Correa Palacio; auto de 31 de enero de 2008, expediente 76001-23-31-000-2006-03378-01 (34.419) CP: Enrique Gil Botero; auto de 10 de abril de 2008, expediente 66001-23-31-000-2004-00912-01 (34.374) CP: Myriam Guerrero de Escobar.

⁷ **Obligaciones del Empleador.** "El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.

El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador."

Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.

Es decir, frente al eventual incumplimiento de las obligaciones del empleador, son las entidades administradoras las obligadas de requerirlo para que realicen el pago de los aportes o lo haga de manera correcta, que si no dan el resultado esperado pueden iniciar los procesos de cobro correspondiente y proceder en debida forma a liquidar y reconocer la pensión respectiva,⁸ sin que ello pueda influir en el derecho al reconocimiento pensional y su régimen, derechos de estirpe legal conforme las obligaciones del administrador del régimen, tal como lo señala la Corte Constitucional en Sentencia C-177 de 1998.⁹

2.3. Caso concreto

Con base en los argumentos expuestos en acápites anteriores, es preciso señalar que la UGPP, es quien tiene la obligación de realizar en debida forma la liquidación de la pensión, así como de su reconocimiento y asume el pago de los perjuicios derivados de las liquidaciones pensionales que efectúe.

Por otra parte, El Ministerio de Hacienda y Crédito Público como empleadora, tiene la obligación de realizar el pago de los aportes respectivos, sin que por ello se pueda señalar que exista vínculo legal para llamarla en garantía para responder por las consecuencias del fallo que se pueda dictar en este proceso en contra de la UGPP, si se ordena la reliquidación de la pensión de su afiliado.

Lo anterior, sin perjuicio de que la UGPP pueda iniciar los medios de control a que haya lugar cuando verifique que existe incumplimiento de las obligaciones del empleador, pues de conformidad con la normativa señalada, la liquidación en la cual se determine el valor adeudado por el empleador presta mérito ejecutivo, sin que esta situación deba ser resuelta en el presente proceso, toda vez que lo que se discute es la reliquidación de la pensión de vejez teniendo como base los factores devengados durante el último años de servicio.

⁸ Al respecto ver entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-362 de 2011, en la cual se indica "Cuando el empleador no traslada los aportes a la entidad de seguridad social, esta última tiene el deber de cobrar los dineros adeudados por el empleador moroso a través de los mecanismos jurídicos establecidos en la ley".

⁹ Sentencia del 4 de mayo de 1998, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero

2.4. Decisión

El Despacho considera que no es procedente el llamado en garantía formulado por la UGPP al empleador Ministerio de Hacienda y Crédito Público para responder por las resultas que podría ocasionar, en caso que se presentara, una sentencia judicial desfavorable. La responsabilidad por el reconocimiento y el pago de la pensión, aún del pago de los perjuicios derivados de la liquidación recae en la UGPP.

Por consiguiente, se denegará la solicitud de llamamiento en garantía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En consecuencia, el Despacho

RESUELVE

DENEGAR la solicitud de llamar en garantía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentada por la UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

Y A H L

<p>JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA</p> <p>NOTIFICACION POR ESTADO</p> <p>El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha veintidós (22) de enero de dos mil diecinueve (2019) a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.</p> <p>Miryam Yanneth Martínez Cortes Secretaria</p>
--

